

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que se acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

## I

Tal y como dispone el artículo 1 del texto sometido a informe constituye su objeto la creación del Registro de Seguridad de Presas y Embalses, así como la regulación de su régimen de funcionamiento.

En este sentido, el artículo 363 el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, establece la obligación de crear, por parte de la Administración pública competente en materia de seguridad de presas y embalses, un Registro de Seguridad de Presas y Embalses, en el que se inscribirán todas las presas y embalses de su competencia. Dicho reglamento *desarrolla*, entre otras, la previsión del artículo **123 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001**, de 20 de julio (“*Ley de Aguas*”), que, con la finalidad de determinar las condiciones esenciales de seguridad que deben cumplir las presas y embalses, estatuye la necesidad de establecer “*las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad, y las funciones que corresponden a la Administración pública*”.

En desarrollo de dicha previsión, contenida en una norma con rango de ley formal —**Real Decreto Legislativo 1/2001**, de 20 de julio— se han dictado diferentes normas, entre las que destacan diversas modificaciones reglamentarias, como —a los efectos que aquí interesan—, la introducida por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, que vino a modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, regulando las obligaciones generales *de registro e inscripción* de Presas y Embalses a la que se refiere la orden que ahora se informa.

De otra parte —también en desarrollo del Texto Refundido de la “Ley de Aguas”—, la aprobación, mediante Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, de las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y sus Embalses, introdujo la

obligación de los titulares de dichas infraestructuras relativa a la clasificación de estas y a la obligatoriedad de su inscripción en un Registro de seguridad.

## II

El texto sometido a informe debe ser objeto de análisis atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, **RGPD**) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales — **LOPDGDD**—.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 4.1 del **RGPD** define datos personales como *"toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona"*.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la *"Definición"* del punto 2 del propio artículo 4 del RGPD, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de *"cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción"*. Por su parte, la definición de *"fichero"* se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a *"todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica"*.

En atención a dichas definiciones, y a la vista del articulado que se informa, resulta claro que, por parte de los órganos competentes (i) *tanto para la tramitación de la inscripción de solicitudes*, (ii) como para la resolución e inscripción de las mismas, se llevarán a cabo tratamientos de datos de carácter personal en el sentido previsto por la normativa de protección de datos, constituyendo el objeto último de dichos tratamientos la inmatriculación de determinados datos en un soporte físico estructurado. Así, tanto en el *Anexo I* de la Orden, relativo a la *"Solicitud de inscripción o modificación de inscripción"*,

como el *Anexo II*, al que se incorporan las diversas “Fichas Registrales” de cumplimentación obligatoria, se contienen datos personales referidos a la identificación, domicilio, residencia, correo electrónico, teléfono, etcétera, del titular de la infraestructura y, en su caso, de su representante, que son datos de carácter personal en el sentido del artículo 4.1 del **RGPD**.

El responsable *principal* de los tratamientos de datos realizados será la Dirección General del Agua —del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— a quien corresponde la resolución del procedimiento y la inscripción de los datos personales en el Registro de Seguridad, si bien, en el supuesto que se informa, podría concurrir la “corresponsabilidad del tratamiento” en la figura de los Organismos Autónomos de las Confederaciones Hidrográficas competentes por razón del territorio, que son los encargados de canalizar las solicitudes de inscripción, y las fichas registrales, así como del análisis técnico de dichas solicitudes y de la emisión de un informe previo a la inscripción.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 26 del RGPD, dispone:

**“Artículo 26 Corresponsables del tratamiento**

1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 13 y 14, salvo, y en la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.
2. El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.
3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.

El RGPD recoge la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma. Como punto de partida, debemos acudir a lo indicado en el Considerando 79 del RGPD que señala que “(...) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de

las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable (...)."

Esta regulación pretende que no queden supuestos de actuación fuera de su ámbito de aplicación, con el fin de dotar a las autoridades de supervisión, de los elementos necesarios para desarrollar su función y, en definitiva, para brindar a los ciudadanos europeos la protección que merecen sus datos de carácter personal. Por tanto, cualquier actividad que conlleve el tratamiento de datos personales será atribuible a algún sujeto que cumpla los requisitos de las distintas categorías que ofrece el RGPD.

En consecuencia, desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, la primera cuestión que debe dilucidarse es la determinación del papel de cada uno de los intervinientes en el *procedimiento administrativo de inscripción o modificación de la inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses* del que trae causa la consulta, a fin de especificar en quién concurre la condición de responsable del tratamiento, siendo importante señalar que dicho responsable es quien ejerce la decisión efectiva **sobre los fines y los medios** del tratamiento —*ex art 4.7 RGPD*—.

Pues bien, en la información básica sobre protección de datos contenida en el **ANEXO I de la Orden**, se determina que la responsabilidad de los tratamientos corresponde únicamente a la *Dirección General del Agua*, resultando dicha previsión clara y taxativa en relación con la atribución normativa de dicha responsabilidad (mapa de responsabilidad), **no existiendo objeción** material ni formal en relación con dicha delimitación, al situarse normativamente de forma concreta y específica la concurrencia exclusiva de un responsable, y la *participación coadyuvante* de otros órganos administrativos en relación con el cumplimiento de los mandatos establecidos en la Orden que se informa.

A mayor abundamiento, en relación con la condición de responsable del tratamiento, conviene recordar lo dispuesto en las **Directrices 7/2020** de 2 de septiembre de 2020, "*Sobre los conceptos de responsable y encargado en el RGPD*", que han sido objeto de adopción definitiva el 7 de julio de 2021:

"21. (...) En la mayoría de las situaciones, el «**órgano determinante**» puede **identificarse fácil y claramente por referencia a determinadas circunstancias jurídicas o fácticas de las que normalmente puede inferirse la «influencia»**, a menos que otros elementos indiquen lo contrario. Se pueden distinguir dos categorías de situaciones: 1) el **control derivado de las disposiciones legales**; y 2) control derivado de la influencia fáctica. (...)" (la negrita es nuestra)  
(...)

“24 (...) la ley establecerá una **tarea o impondrá a alguien la obligación de recopilar y tratar determinados datos**. En esos casos, la finalidad de la tramitación **suele ser determinada por la ley**. **El responsable será normalmente el designado por la ley para la realización de este propósito, esta tarea pública** (...) De manera más general, la ley también puede imponer a las entidades públicas o privadas la obligación de conservar o facilitar determinados datos. Estas entidades normalmente se considerarían responsables con respecto al tratamiento necesario para cumplir esta obligación.” (la negrita es nuestra)

### III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. De acuerdo con el artículo 6 –“Licitud del tratamiento”-, del Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-, dicho tratamiento es lícito, y, por tanto, legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

**c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;** (la negrita es nuestra)

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

**e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;** (la negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Esta Agencia Española de Protección de Datos ha tenido oportunidad de analizar la base jurídica de los tratamientos de datos por las Administraciones públicas —entre otros— en sus Informes jurídicos 108/2018, 155/2018 y **175/2018**. En dichos informes se expone que:

“II

*En cuanto al sentido de la expresión “obligación legal” contenida en el artículo 6.1.c) RGPD, dicha expresión equivale, en la regulación española de protección de datos, a “obligación establecida en una norma con rango de ley”. El art. 53.1 de la Constitución (CE) establece que [l]os derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a). El derecho fundamental a la protección de datos personales se contiene en el art. 18.4 CE, y por tanto le es aplicable la necesidad de una ley para limitar el mismo.*

*A este respecto hay además que señalar que el Tribunal Constitucional ha interpretado los requisitos y circunstancias de la cesión de datos entre Administraciones Públicas, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (LOPD) en diversas sentencias, entre las que cabe destacar ahora la STC 17/2013, de 31 de enero (FJ 4º), y la STC 292/2000, de 30 de noviembre, a que hace referencia la anterior:*

(...)

*“Hay que recordar que la Administración está vinculada por el principio de legalidad, de manera que, a diferencia de los particulares, tan sólo puede llevar a cabo aquello para lo que el ordenamiento jurídico le permite expresamente. Este es el sentido de lo dispuesto en los artículos 9.1 y 103 de la Constitución, de suerte que cuando la ley y el derecho no han atribuido a la Administración las potestades correspondientes para actuar ante una determinada situación, esa actuación no podrá llevarse a cabo sin que previamente el ordenamiento le atribuya dichas potestades. No existe por tanto un espacio vacío donde a falta de ley pueda la Administración actuar. Es lo que se ha denominado la doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la legalidad (García de Enterría). En consecuencia, para que la Administración pueda actuar necesita de una previa habilitación legal (entendida aquí legalidad como habilitación normativa). Y ello tanto si la Administración actúa en el ámbito del derecho público como el ámbito del derecho privado. Así podemos ver que incluso en este último ámbito, en el que actuaría en el mismo rango que los particulares, la Administración necesita una norma que le habilite a actuar.*

(...)



*En cualquier caso, el RGPD excluye de la posibilidad de que los tratamientos realizados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (sin distinguir si dichas funciones están sometidas al derecho público o al privado) puedan tener como base jurídica del tratamiento la letra f) del art. 6.1 RGPD, esto es, el interés legítimo. Ello, sin duda, porque parte de la base, como demuestra el considerando 45 RGPD, de que cuando se realice un tratamiento de datos en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, dicho tratamiento ha de tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. En definitiva, dicho tratamiento de datos estará amparado por **la letra e) del art. 6.1** si el derecho aplicable ha atribuido una competencia a la Administración, y no lo estará en caso contrario. (la negrita es nuestra (...))”*

Así, la Agencia —en el citado **Informe 0175/2018**— sostiene que “Con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).”

A este respecto, el **artículo 8 de la LOPDGDD**, que lleva por rúbrica “Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos”, en su *apartado 2*, dispone que:

“2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Por consiguiente, para que el tratamiento pueda ampararse en los apartados c) o e) del artículo 6.1 del RGPD, se requiere que una norma con rango de ley atribuya la competencia, competencia que, de acuerdo con el principio de vinculación positiva de la Administración a la ley, únicamente podrá ejercerse en los términos y dentro de los límites en que haya sido atribuida por dicha norma legal y, en su caso, por los preceptos reglamentarios que la desarrollen.

En este escenario, el **artículo 123 bis del texto refundido de la Ley de Aguas**, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se constituye en la habilitación normativa necesaria en orden al establecimiento de las condiciones esenciales que deben cumplir las presas y embalses. Así, entre

otras obligaciones y responsabilidades de sus titulares, se estatuye la necesidad de implementar procedimientos de control de la seguridad.

A su vez, la administración pública del agua y las funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico, se concretan en los artículos **14 y 17** de la “Ley de Aguas”. Dichas atribuciones del Estado sobre el dominio público del agua —como bien demanial— derivan del **ejercicio del poder público conferido a este por la normativa aplicable**.

Así, de acuerdo con la dicción literal de los citados artículos, el Estado ejerce sus funciones *sobre el dominio público hidráulico*, siendo necesario el tratamiento de los datos de carácter personal objeto del presente informe para el ejercicio de dicho **poder público**, a saber:

“Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio:

**Artículo 14.** *Principios rectores de la gestión en materia de aguas.*

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:

- 1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.
  - 2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
  - 3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
- (...)

**Artículo 17.** *Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico.*

En relación con el dominio público hidráulico y en el marco de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, el Estado ejercerá, especialmente, las funciones siguientes:

- a) La planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas.
- b) La adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas.
- c) El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma.
- d) El otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de las



mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.”

En este contexto, la creación de un *Registro de Seguridad de Presas y Embalses y la regulación de su régimen de funcionamiento* resulta de los poderes públicos conferidos al Estado por la normativa aplicable, y la legitimación para llevar a cabo los tratamientos de datos realizados en la orden que se informa se obtiene de lo dispuesto en la letra **e)** del artículo 6.1 del RGPD.

Asimismo —en el supuesto del incumplimiento de las obligaciones contenidas en la orden—, la aplicación del régimen sancionador previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, deriva de la potestad pública sancionadora conferida al Estado por dicha norma.

#### IV

Según dispone el artículo 8 del proyecto de orden que se informa:

**“Artículo 8. Fichero de datos de carácter personal.**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales que figuren en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses se incorporarán al fichero de datos personales *Fichero del Registro Electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico*, cuya titularidad corresponde a la Subsecretaría del Departamento y que resulta válido a efectos del ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos previstos por dicha Ley.”

Pues bien, como se observa, dicho precepto se remite, de manera errónea, a lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente LOPDGDD, que regula el *tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas*, estableciendo sus especialidades y su régimen de acceso.

Probablemente el órgano consultante, en el texto presentado a informe, pretenda referirse al derogado artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que, bajo el título *Notificación e inscripción registral*, recogía la obligación —actualmente inexistente— de que toda persona o entidad que procediese a la creación de ficheros de datos de carácter personal, lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

De este modo, el citado precepto responde a la normativa anterior que se centraba en el concepto de “fichero”, y que ha sido superada por la vigente normativa que se centra en el “tratamiento”, tal y como señalábamos en el Informe 94/2022:

*(...) conviene indicar que una de las novedades del RGPD, es que la noción de “fichero” ya no es uno de los elementos clave del sistema de protección de datos, ya no puede ser considerada como piedra angular del sistema, que venía a determinar por su mera existencia la aplicación de la normativa y otorgaba una posición relevante a determinados intervinientes en el tratamiento de datos como era el “responsable del fichero” y suponía el sometimiento al régimen sancionador previsto en la hoy derogada LOPD de 1999 (Artículo 43).*

*Ahora la regulación se centra principalmente en el “tratamiento” como eje fundamental en la normativa de protección de datos.*

*La pérdida de relevancia de dicho elemento, la encontramos, por ejemplo, en el Capítulo IV del RGPD, bajo la denominación “Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento” únicamente se regulan estas figuras junto con los supuestos de corresponsabilidad. Es decir, ha desaparecido la figura del responsable del fichero, como tampoco aparece en las definiciones del artículo 4 como si lo hace el responsable y el encargado.*

*Asimismo, otra muestra de la pérdida de relevancia del fichero como elemento en protección de datos, se observa con la desaparición de la obligación de inscribir el fichero en el extinto Registro General de Ficheros de la AEPD que ha sido suprimida de la actual normativa, pudiendo entenderse sustituido por la obligación de disponer de un Registro de Actividades del Tratamiento, en los supuestos previstos en el artículo 30 del RGPD y artículo 31 de la LOPDGDD.*

*En la actualidad, la noción de fichero la encontramos en el RGPD, únicamente, en el apartado de definiciones (artículo 4.6) y como elemento de aplicación material del reglamento, cuando estemos ante el tratamiento no automatizado de datos personales que estén “contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero” (artículo 2.1).*

*Es decir, resulta obvio la aplicación residual del concepto del fichero en la vigente normativa de protección de datos, en comparación con el régimen jurídico que se derivaba de la Directiva 95/46/CE.*

*En consecuencia, la redacción del precepto en lo que se refiere a este aspecto ha de considerarse obsoleta pues parece obedecer a la anterior regulación, al indicar “fichero titularidad de (...)”, a pesar de no hacerlo expresamente, está utilizando implícitamente el concepto de “responsable del fichero” que hoy en día no consta ni en el RGPD ni en la LOPDGDD. Por lo que se propone su eliminación.*

*(...)*

A su vez, en este punto, la orden que se informa debería señalar de manera explícita que el tratamiento de los datos de carácter personal se realizará con estricta sujeción al RGPD y a la LOPDGDD, pudiendo referirse —asimismo— a la concreción de las obligaciones derivadas de la existencia de un “Registro de las actividades de tratamiento”, que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 30 RGPD, cuando dispone:

*“Artículo 30 Registro de las actividades de tratamiento*

1. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación:

- a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de datos;
- b) los fines del tratamiento;
- c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;
- d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;
- e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;
- f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;
- g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1.”

A este respecto, conviene recordar que, según dispone el artículo 31.2 de la LOPDGDD, el inventario de *Actividades de Tratamiento* debe hacerse público por medios electrónicos:

*“Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.*

1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica **harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos** en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal. (la negrita es nuestra)”

**V**

El ANEXO I del proyecto de orden que se informa, comprende un apartado sobre *Información Básica sobre Protección de Datos*, en el que se indica:

“Información básica sobre Protección de Datos

La Dirección General del Agua, como responsable del tratamiento, informa que los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones serán tratados con la finalidad de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio, dentro de las funciones del órgano y del organismo, conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Le indicamos que sus datos serán conservados mientras dure la relación contractual/mercantil y permanecerán bloqueados tras la finalización de la misma. **La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de las Normas Técnicas de Seguridad de Presas.** Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal o para la prestación del servicio. El usuario puede ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Oposición, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad. No ser objeto de decisiones individuales automatizadas (...) que reconoce el RGPD y la LOPDGDD ante la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. Pl. de San Juan de la Cruz, s/n, 28003 Madrid. Teléfono (...). E-Mail: (...) en los términos establecidos por la legislación vigente al efecto. En cualquier situación, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.” (la negrita es nuestra)

Pues bien, en relación con la base jurídica del tratamiento —*sin perjuicio de la mención específica de la finalidad o finalidades pretendidas* por el órgano consultante, y de la *supresión* de la mención a la posible *revocación del consentimiento para estos supuestos*—, deberá informarse que el tratamiento responde a la base de legitimación del artículo 6.1.e) del RGPD, al resultar necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Asimismo, sin perjuicio de la licitud del tratamiento, el mismo deberá cumplir también con el resto de *los principios de protección de datos*, cuyo respeto, garantía y cumplimiento deberán guiar la actuación del órgano consultante en relación con su actividad con incidencia en el tratamiento de la información personal de las personas afectadas.

“Principios relativos al tratamiento

1.Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento

ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»); c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»); f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Finalmente, el proyecto normativo objeto de informe se refiere a la aprobación —mediante Real Decreto 264/2021, de 13 de abril— de las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. Así, de acuerdo con el artículo 1 de dicho Real Decreto:

“1. El presente real decreto tiene por objeto aprobar las Normas Técnicas de Seguridad de las presas y sus embalses que se enumeran a continuación:

a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de las presas y sus embalses.

b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de las presas y llenado de sus embalses.

c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de las presas y sus embalses, que se incorporan como Anexos (...)

2. Las Normas Técnicas de Seguridad contenidas en este real decreto, en cuanto exigencias mínimas de seguridad de las presas y sus embalses y cuya finalidad es la de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, serán de obligado cumplimiento en las distintas fases de la vida de las presas situadas en territorio español.”

Sin embargo, en relación con la **seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal** objeto de la orden, **no se contiene previsión alguna** en el texto que se informa, careciendo la norma de ninguna regulación al respecto.

En este sentido, el artículo 24.1 RGPD dispone que “Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los

riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario”.

A su vez, en relación con la seguridad de la información, el artículo 32.1 establece que “Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo”.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 11/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:

*“Artículo 3. Sistemas de información que traten datos personales.*

*1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.*

*2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.*



*3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.”*

En consecuencia, se informa que debería incorporarse explícitamente, en su artículo 8, una mención expresa al nuevo régimen de protección de datos, basado en la necesidad de realización del análisis de riesgos establecido en el artículo 24 del Reglamento para la determinación de las medidas que garanticen adecuadamente la seguridad de la información desde el enfoque de la protección de datos de carácter personal, proponiéndose —a tales efectos— la siguiente redacción:

***Artículo 8. Tratamientos de datos de carácter personal.***

***1. Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas que sean necesarios para la aplicación de la presente orden se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.***

***2. El tratamiento de los datos personales se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, al realizarse para el cumplimiento de una misión de interés público y en el ejercicio de potestades públicas conferidas a la Dirección General del Agua, responsable del tratamiento.***

***3. Los sistemas de información que traten datos personales deberán garantizar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que resulten de la correspondiente evaluación de impacto en la protección de datos, en los términos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.***

En definitiva, deberá procederse a las modificaciones apuntadas en el presente Informe para su debida adecuación a la normativa de protección de datos.